

V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata, 2008.

Los últimos grandes cortes de ruta- puebladas de Tartagal-Mosconi. .

Benclowicz, Jo sé.

Cita:

Benclowicz, Jo sé (2008). *Los últimos grandes cortes de ruta- puebladas de Tartagal-Mosconi*. V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-096/572>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/edBm/bOu>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

V Jornadas de Sociología de la UNLP
I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales

“Cambios y continuidades sociales y políticas en Argentina y la región
en las últimas décadas. Desafíos para el conocimiento social”

La Plata, 10, 11 y 12 de diciembre de 2008

Mesa J 37

Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina (1970-2008)

Coordinadores:

Alberto R. Bonnet (UNQ / UBA); abonnet@unq.edu.ar

Juan Grigera (UNLP / CONICET / UNQ); juan@fahce.unlp.edu.ar

Alejandro Schneider (UNLP / UBA); aschneider98@yahoo.com.ar

Nombre y apellido del autor: José Benclowicz

Pertenencia institucional: UBA/CONICET

Dirección de correo electrónico: jd.benclowicz@gmail.com

TÍTULO DE LA PONENCIA: Los últimos grandes cortes de ruta-puebladas de Tartagal-Mosconi.

Los últimos grandes cortes de ruta-puebladas de Tartagal-Mosconi

*José Daniel Benclowicz**

Introducción

En esta ponencia se plantea el análisis de los últimos grandes cortes de ruta-puebladas que se produjeron en las localidades de Tartagal y General Mosconi, en el norte de la provincia de Salta, en mayo y noviembre de 2000 y junio de 2001. Las contrarreformas de la década de 1990 provocaron fuertes alteraciones económicas, sociales y políticas en la zona. Desde 1997, los cortes de ruta y puebladas alimentaron un proceso de deliberación popular en el que participaron activamente sectores de izquierda insertos en el núcleo de relaciones sociales locales, que aportó elementos para la conformación y desarrollo del movimiento de trabajadores desocupados de la zona,¹ dentro del cual se destacó la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, agrupación dirigida por ex ypefianos. Hacia el año 2000, surgieron nuevos elementos que provocaron la radicalización de la situación, e impulsaron al movimiento a alcanzar su punto más alto de desarrollo desde la perspectiva de la lucha de clases, cuando se conformó la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta, y prácticamente se desintegraron los Estados municipales. Hacia mediados del 2001, en cambio, sobrevino una etapa de reflujo de características contradictorias, que se mantiene hasta la actualidad.

El corte-pueblada de mayo del 2000

El ascenso de la Alianza al poder a fines de 1999 implicó un cambio en materia de las políticas de ayuda social que habían sido implementadas tras las primeras puebladas en Neuquén y Salta; y partir de ese momento siguieron un curso bastante errático. A fines de ese año se produjo el segundo corte de importancia en Tartagal y Mosconi, que a diferencia del primero (1997), que tuvo un carácter multisectorial, fue protagonizado por trabajadores municipales y desocupados. El corte de diciembre de 1999 se levantó tras el compromiso del nuevo gobierno de mantener los planes “Trabajar” existentes y crear puestos de trabajo genuinos. No teniendo la capacidad organizativa necesaria, y para no dejar en manos de la red clientelar del Partido Justicialista la distribución de la ayuda social, el oficialismo impulsó la

* Historiador UBA/CONICET. Correo electrónico: jd.benclowicz@gmail.com

¹ Estos temas han sido desarrollados en Benclowicz (2006 y 2008).

participación de distintas organizaciones intermedias; de ese modo, la UTD de Mosconi comenzó a presentar sus propias iniciativas, independientemente del municipio (Svampa y Pereyra, 2003: 94). Este hecho favoreció el crecimiento de la organización, que impulsó distintos proyectos productivos orientados a satisfacer distintas necesidades de la comunidad. Pero por otra parte, el gobierno aliancista redujo significativamente la cantidad de planes sociales.² En Tartagal y Mosconi, de un total de 4.192 planes otorgados en el año 1999 se pasó a 1.917 en el 2000 (*El Tribuno*, 20/5/2000, “Las declaraciones de Álvarez son lamentables”). De ese modo, los acuerdos firmados con los piqueteros en diciembre no fueron cumplidos, lo que motivó nuevos cortes de ruta en marzo y abril de 2000. (Ver Lapegna, 2000: 54 y 55; y *El Tribuno*, 3/5/2000, “Corte a la altura de General Mosconi”). A eso se le agregaron la falta de pago de los planes, amenazas de desalojo por falta de pago de alquileres y el reemplazo de parte del sueldo de los empleados municipales por vales de alimentos (Oviedo, 2001: 97). En ese contexto, fue madurando un clima de agudo descontento que derivó en el tercer gran corte de ruta, seguido de una pueblada de características inéditas en la región, a principios de mayo de 2000.

Hacia abril de 2000, se desarrollaba una intensa disputa política entre el gobierno y el PJ. La negativa de la Alianza a la aprobación de planes sociales estaba afectando seriamente a la red clientelar del PJ en todo el país, que dependía en parte de esos recursos para sostener su funcionamiento, en especial en la provincia de Buenos Aires. A su vez, el gobierno intentaba aprobar la *Reforma laboral*, que profundizaba la flexibilidad y precariedad del régimen laboral que caracterizaron a los años del menemismo. En ese contexto, el PJ desplegó un discurso de oposición, a fin de presionar a las autoridades nacionales (Ver por ejemplo, *Clarín*, 28/4/2000, “El gobierno condicionó a los planes Trabajar” y *El Tribuno*, 3/5/2000, “Sin apoyo de la Alianza, diputados del PJ van por más planes Trabajar. Si el bloque oficial no baja al recinto, los justicialistas no acompañarán la reforma laboral”).³ Por otra parte, las luchas sociales comenzaban a multiplicarse en todo el país, y en el gobierno se veía con preocupación la posibilidad de que se produjesen estallidos sociales en distintos puntos.

En Tartagal y en Mosconi, el malestar social reinante se conjugó con la disputa entre los partidos del poder, y tras la instalación de una olla popular frente a la municipalidad de Mosconi, se inició un nuevo corte de la ruta n° 34 con el apoyo más o menos visible de ambos intendentes, hecho que aparece confirmado en distintos testimonios y artículos periodísticos:

² Al momento de triunfar en los comicios, en octubre de 1999, había 89.665 beneficiarios de los planes Trabajar en todo el país, para mayo de 2000, sólo quedaban 29.066 (Ver Svampa y Pereyra, 2003: 94).

³ La oposición fue discursiva y efímera; poco después la ley de Flexibilidad Laboral fue votada por la mayoría de los diputados justicialistas. Más adelante, salió a la luz que el gobierno de Fernando de la Rúa había recurrido al pago de sobornos a varios legisladores para lograr la aprobación de la norma.

“Entonces la clase política que gobierna Tartagal manda a cortar la ruta. Los mismos que gobernaban mandan a cortar la ruta. El vocero del corte de ruta es Cacho Javier. Cacho Javier [...] es operador político del intendente Ángel. El vocero pasa a ser Cacho Javier, que como te digo es operador político del intendente. Y nosotros tenemos la información que desde Mosconi, el intendente García también había movilizado un poquito a cortar”. (Entrevista de agosto de 2000 a periodista, miembro de la comisión negociadora de 1997, en Lapegna, 2000: 34.)⁴

En Mosconi, más allá del apoyo del intendente a la protesta, el movimiento principal surgió de un grupo de mujeres beneficiarias del plan Trabajar, que solicitó el apoyo a UTD para reclamar por la continuidad y la falta de pago de los subsidios. (Ver *Prensa Obrera*, 25/5/2000, “Hablan los protagonistas”). De este modo, los intereses de los sectores del poder político local convergieron circunstancialmente con los de los trabajadores desocupados, y se inició un nuevo corte de la ruta n° 34 el 2 de mayo, a la altura de General Mosconi. Al día siguiente, los desocupados de la vecina localidad de Embarcación realizaron otro corte, que fue reprimido y levantado el 5 de mayo por fuerzas de la gendarmería, que actuaron según las instrucciones judiciales. Las mismas instrucciones fueron impartidas con relación a la protesta de los trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi, aunque a pesar de las amenazas, no se hacían efectivas.⁵ El carácter dual de la protesta –impulsada a la vez por sectores populares y por referentes del poder local– comenzó a disolverse hacia el 7 de mayo, día en que se cumplía un nuevo año desde el primer gran corte de 1997. En esa fecha, los manifestantes apostados en la ruta, que según distintas fuentes periodísticas oscilaban desde el principio del corte entre 300 y 350 personas, decidieron celebrar ese aniversario con distintos artefactos de pirotecnia; las explosiones hicieron pensar a los pobladores de Mosconi que la protesta estaba siendo reprimida, lo que los impulsó a concurrir masivamente a la ruta (Lapegna, 2000: 35). En ese cuadro, se pueden ver los lazos de solidaridad que se fueron tejiendo entre los piqueteros y el conjunto de la comunidad, compuesta mayoritariamente por trabajadores ocupados y desocupados.⁶

⁴ Ver también entrevista a mujer integrante de la comisión de desocupados formada en Tartagal luego del corte de 1999, en Lapegna, 2000: 34; y *El Tribuno*, 3 de mayo de 2000, “Corte de ruta a la altura de General Mosconi”.

⁵ Mientras tanto, otros sectores comenzaban a movilizarse a nivel nacional: el 5 de mayo se produjo un paro general impulsado por la CGT “rebelde”, Confederación General del Trabajo liderada por el dirigente del gremio de camioneros Hugo Moyano.

⁶ El 9 de mayo, otro hecho contribuyó a abroquelar aún más a los manifestantes y la población y a elevar la tensión: en circunstancias muy dudosas, mueren dos piqueteros que habían ido en camioneta a buscar cubiertas para quemar en el piquete: Orlando Justiniano y Matías Gómez. Distintos indicios sugieren que fueron asesinados por la policía provincial.

Un día después de ese acontecimiento, comenzaron a aparecer versiones sobre la presencia de grupos armados entre los manifestantes, de las que se hizo eco rápidamente el ministro del Interior de la Nación, Federico Storani (Ver *El Tribuno*, 9/5/2000, “Rociaron tanques de Refinor”; *El Tribuno* 10/5/2000, “Storani denunció la presencia de personas armadas”; *Clarín*, 10/5/2000, Mandaron gendarmes para despejar una ruta en Salta”; *Página 12*, 11/5/2000, “Con la espada de la orden de desalojo”). Mientras tanto, se convocó a un “Comité de Crisis”, integrado por los gobiernos nacional y provincial, que se disponía a ordenar la actuación de las tropas de gendarmería para desalojar por la fuerza la ruta.⁷ El Comité de Crisis recibió un pliego con los reclamos de los piqueteros de Tartagal-Mosconi, y de la localidad vecina de Aguaray, que se habían sumado a la protesta.

El levantamiento popular

Hacia el 11 de mayo, las amenazas de represión se multiplicaron, y comenzó a circular el rumor de que era inminente el avance de tropas de gendarmería nacional y de la policía provincial. Ante esa situación, las comunidades de Tartagal y Mosconi se organizaron para apoyar y defender el corte. En Mosconi, la sirena del cuerpo de bomberos era activada cada vez que se suponía se acercaban las fuerzas represivas, y miles de pobladores se volcaban a la ruta: “Confusión y tensión fueron las características de la jornada de ayer en el corte de ruta en General Mosconi. Alimentado por esta situación, creció el número de manifestantes, que de trescientos que había al mediodía pasaron a cerca de cuatro mil personas en horas de la tarde” (*El Tribuno*, 12/5/2000, “Aumentó la tensión en el corte de ruta en General Mosconi”).

La represión se produjo al día siguiente, el 12 de mayo, a la madrugada.⁸ Cientos de efectivos de Gendarmería y de la Policía de Salta atacaron a los manifestantes, que se defendieron con piedras y palos. Después de poco más de una hora de intensos enfrentamientos, que incluyeron la quema de dos camiones que fueron utilizados como barricadas, los piqueteros retrocedieron hacia el pueblo de General Mosconi. La Policía de la provincia ingresó al pueblo en busca de los piqueteros y comenzó a allanar el hospital y domicilios particulares donde presuntamente se habían refugiado, al tiempo que lanzaba gases

⁷ La figura del “Comité de Crisis” está prevista en la ley 24.059 de seguridad interior, para los casos en que “[...] se vean amenazados gravemente en el país o en una región determinada el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías o la plena vigencia de sus instituciones”.

⁸ “Cacho” Javier, identificado como operador político del intendente de Tartagal y uno de los impulsores iniciales de la protesta, desapareció del corte algunas horas antes de la represión (Ver *El Tribuno*, 13/5/2000, “Juan Domingo ‘Cacho’ Javier ‘vocero’ de los piqueteros”; y *Prensa Obrera*, 25/5/2000, “Hablan los protagonistas”). Resulta evidente que a esa altura, el poder local era incapaz de desactivar la protesta que había contribuido inicialmente a organizar, y que ahora estaba fuera de su control.

lacrimógenos y disparaba con balas de goma y de plomo por las calles;⁹ actuando, en suma, como una verdadera fuerza de ocupación: “Durante el operativo de desalojo de la ruta un grupo importante de piqueteros logró huir hacia el pueblo, ingresando por las calles de los barrios 17 de Agosto y 8 de Diciembre. En cuestión de minutos se hizo presente en el lugar un importante número de policías, que comenzó a perseguir a los manifestantes. Estas acciones se caracterizaron por una violencia insólita, ya que los uniformados entraban a las casas rompiendo las puertas e incluso agrediendo a los vecinos que reclamaban por los excesos. Los gases lacrimógenos y las balas de goma no respetaron ni siquiera los interiores de las viviendas”. (*El Tribuno*, 13/5/2000, “Violencia en Mosconi”).

Ese hecho terminó por provocar un estallido popular sin precedentes en la zona. La población se volcó masivamente las calles, tomó la comisaría, expulsó a la policía del pueblo, atacó los símbolos del poder político y económico –la municipalidad fue destruida e incendiada, lo mismo sucedió con un cajero automático del banco Macro, ex banco Provincia–, se encaminó hacia la ruta. Mientras tanto, en Tartagal, apenas se conocieron los acontecimientos, sucedió otro tanto: miles de personas salieron de sus casas –más de 10 mil personas según *Clarín*, más de 20 mil según *El Tribuno*– y recorrieron rápidamente los siete kilómetros que los separaban del lugar donde estaba instalado originariamente el corte, se unieron a los miles de manifestantes de Mosconi y enfrentaron conjuntamente a las fuerzas represivas, que fueron obligadas a retroceder. En ese punto, el conflicto presenta los elementos de una verdadera guerra civil, con dos bandos bien delimitados: el pueblo de Tartagal-Mosconi, que participa masivamente –incluida buena parte de la prensa local, que adoptó una posición favorable a los manifestantes¹⁰ y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, que intervienen por orden de los grupos dirigentes de ambas jurisdicciones.¹¹

En momentos en que la Gendarmería era obligada a retroceder ante el avance incontenible de los manifestantes, y a pedido del gobierno nacional, intervinieron representantes de la Iglesia católica, que lograron establecer una tregua. La ruta quedó bajo el control del pueblo de Tartagal y de Mosconi, y el gobierno se vio forzado a negociar. En la ruta se celebraron Asambleas Populares que elaboraron un pliego de reclamos que retomaba los reclamos incumplidos de 1997 y 1999, y los superaba, exigiendo por ejemplo la creación de 15.000 puestos de trabajo genuino. Asimismo, se eligieron 15 delegados (ver *El Tribuno*,

⁹ A pesar de no estar oficialmente autorizadas, se denunció la utilización de balas de plomo en la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Los heridos atendidos en los hospitales y los impactos que aún se pueden observar en distintas casas confirman la veracidad de la denuncia.

¹⁰ En particular, se destaca el rol jugado por *Videotar*, el canal de cable local de Tartagal.

¹¹ Para una crónica detallada, ver *El Tribuno*, 13/5/2000, “Más de 20.000 tartagalenses restablecieron los piquetes”.

14/5/2000, “Restituyeron los Planes Trabajar”; y *Prensa Obrera*, 25/5/2000, “La pueblada de Tartagal y Mosconi: la victoria de un gran levantamiento popular”)– para negociar con los representantes de la nación y la provincia, aunque la Asamblea Popular conservó el poder de decisión: “[...] a las 7.30, surgía de la mesa de negociación la primera de las actas-acuerdo, que luego, tras las asambleas populares celebradas en el piquete, volvían al recinto de negociación con enmiendas, observaciones y nuevos requerimientos votados en plena ruta”. (*El Tribuno*, 14/5/2000, “Restituyeron los planes Trabajar”). De hecho, el primer acta-acuerdo, sometida a consideración de la Asamblea a primeras horas de la mañana del día 13, fue rechazada por no incluir entre sus puntos la intervención provincial de los municipios involucrados (Ver *Clarín* 14/5/2000, “Del día de la violencia a la larga noche del acuerdo”). Finalmente, después de 12 horas de negociaciones, cuando los delegados comunicaron a la Asamblea la aceptación por parte del gobierno de la mayor parte de las exigencias de los manifestantes, se decidió el levantamiento del corte.

Consecuencias de la pueblada

En el marco del levantamiento popular se desplegó un nuevo capítulo de la crisis de hegemonía que se venía manifestando en los anteriores conflictos, alcanzando esta vez un elevado nivel de desarrollo. En el corte de 1999, las acciones estuvieron limitadas a los piqueteros que cortaban la ruta y los manifestantes que los apoyaban; en mayo de 2000 fue el pueblo de Tartagal-Mosconi en su conjunto el que se organizó como bloque contra las fuerzas represivas del Estado, en defensa de los piqueteros. Lo mismo se produjo, en una escala menor, incluso antes de la represión, cuando miles de pobladores se acercaron a la ruta para apoyar a los piqueteros ante las versiones que anunciaban el avance de las fuerzas de seguridad. Estos hechos muestran una relación de fuerzas ideológica que es favorable al movimiento piquetero, de ahí que los argumentos del gobierno nacional y provincial para justificar la represión ante la población, que incluían la supuesta identificación de “grupos armados” e “infiltrados”,¹² no fuesen escuchados.

Sin embargo, la entrada de la policía provincial en Mosconi constituyó un momento fundamental, comparable a la entrada de un ejército de ocupación. La población, que se mostró solidaria con la causa piquetera desde un principio, no cayó presa del pánico, sino que salió a las calles a expulsar al “invasor”. A su paso, atacó a las instituciones “colaboracionistas”: el poder político local, representado por la municipalidad, el poder

¹² Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, recurrió la figura del “infiltrado” para justificar la represión, anticipando de este modo al gobierno aliancista, que adoptó esa figura y otras de la jerga de la “lucha antisubversiva” poco tiempo después (Ver *Clarín*, 13/5/2000, “Hay piqueteros infiltrados”).

económico, representado por el banco, la comisaría, sucursal de la Policía de Salta. Todos los representantes del Estado fueron visualizados como enemigos, de ahí la acción contra los símbolos del poder que le confiere a esta pueblada un nivel de radicalización mucho más elevado que la de 1997.

Otro aspecto que resulta necesario destacar, es el hecho de que mientras duró la pueblada, los piqueteros se convirtieron en el sector dirigente de la población de Tartagal-Mosconi. En su defensa se marchó hacia la ruta, se enfrentó a las fuerzas represivas. El prestigio ganado por los piqueteros desde el '97 a esta parte, y la estrecha relación entre ellos y el resto de la población, son factores que no pueden desconocerse a fin de explicar este fenómeno. El piquetero no constituye una otredad con respecto a la comunidad, es un familiar, un amigo, un conocido. Ahora bien, esta identificación es posible porque el movimiento piquetero ha logrado que su lucha, centrada en el problema de la desocupación, sea visualizada como interés general, de ahí su potencialidad para encabezar el bloque contrahegemónico que parece emerger. A su vez, el movimiento piquetero asumió las reivindicaciones de todo el pueblo, levantando las demandas incumplidas formuladas en el primer corte-pueblada de 1997. Una de las derivaciones de esta situación es la modificación de la relación de fuerzas entre las clases sociales, hecho que se encuentra reflejado en la elección de los delegados que negociaron con las autoridades. A diferencia de la primera pueblada, en la que la comisión negociadora estaba compuesta por uno o dos representantes de cada sector, en mayo del 2000 los delegados no tenían una adscripción corporativa: respondían a la Asamblea Popular, conformada mayoritariamente por trabajadores ocupados y desocupados.

Por último, en esa última oportunidad el Estado no pudo figurar como participe en la distribución de la ayuda social, que según lo acordado quedó a cargo de la Iglesia católica y representantes piqueteros. La Iglesia debió cumplir funciones del Estado, lo que devela la debilidad del orden político imperante. En la fase álgida del conflicto, los representantes del Estado no contaban con la legitimidad necesaria para hacerse cargo una actividad social vital como es la distribución de los recursos necesarios para la vida, por lo que el régimen buscó refugio en un engranaje cultural como la Iglesia, que conserva su integridad y ascendencia en la zona.

Avance del movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi

A partir de la pueblada de mayo de 2000, el movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi entró en una nueva etapa. En Tartagal, algunos días después del corte se

conformó la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD), liderada por Pepe Barraza, del Partido Obrero. Pepe Barraza contaba con una amplia experiencia como trabajador estatal y militante sindical y político. Por su parte la UTD, que hasta ese momento había sido liderada por Juan Nievas, vinculado al Partido Comunista, asumió un perfil más autónomo bajo el liderazgo de Pepino Fernández.

En el año 2000, ambas agrupaciones comenzaron a manejar directamente gran cantidad de planes Trabajar, evitando de este modo el manejo clientelístico característico del poder político. Para asumir el control de los planes, debieron presentar proyectos “comunitarios” o “productivos” en el marco de los cuales se desarrolla la “contraprestación laboral” a la que están obligados los beneficiarios según la reglamentación vigente. A partir de estos proyectos, desde el año 2000 hasta la actualidad, la UTD y la CTD-PO han desarrollado un conjunto de actividades vinculadas a las necesidades de la comunidad. La experiencia de haber sufrido y derrotado la represión, y la de hacerse cargo de administrar la ayuda social que garantizaba los medios de vida elementales a buena parte de la población, consolidaron al movimiento y lo legitimaron aún más ante la comunidad.

La persistencia de los elevados índices de desempleo –que de acuerdo a las estimaciones de los respectivos municipios son del 60% en Mosconi (Municipalidad de Mosconi, 2005), y del 50% en Tartagal (Municipalidad de Tartagal, 2004)–, en un contexto en el que se habían puesto en pie organizaciones de lucha representativas e independientes de los sectores del poder, actuó como una usina que multiplicaba la influencia de un movimiento de trabajadores desocupados, que no se limitaba a gestionar planes sociales. Tras el corte de mayo de 2000, la UTD y la CTD-PO comenzaron a movilizarse sistemáticamente a las sedes de las empresas petroleras, organizando cortes de acceso para exigir la contratación de desocupados y reclamar aumentos de salarios,¹³ con notable éxito. En función de esa práctica, se produce una situación inédita en el mecanismo habitual de la relación capital-trabajo: no son los capitalistas quienes seleccionan a los asalariados, sino que son las organizaciones de trabajadores desocupados las que imponen las nóminas de personal. Este hecho favorece a su vez la solidaridad de los contratados con los que están esperando para emplearse en las empresas, ya que son las mismas organizaciones que los ayudaron a ingresar, las que luchan para incorporar nuevos trabajadores. Como en la casi totalidad de los casos se trata de trabajos temporarios, la dinámica se reproduce cíclicamente. El marco legal favorece a las empresas,

¹³ Hacia el año 2000, varias petroleras aplicaban el convenio de la UOCRA –el gremio de la construcción–, que era de 0,95 pesos la hora, significativamente inferior al petrolero, de 2,50 pesos la hora. La acción conjunta de los piqueteros de Mosconi, Tartagal y Pocitos logró imponer un convenio “piquetero” de 2,50 pesos para los trabajadores que fueron contratados a raíz de esa lucha.

que no tienen obligación de efectivizar al personal, pero deben negociar con las agrupaciones piqueteras cada vez que ejecutan un proyecto que demande mano de obra. Dadas estas condiciones, los desocupados organizados asumen funciones sindicales, teniendo en cuenta que negocian los salarios y las condiciones laborales. Los gremios oficiales involucrados –de la construcción y del petróleo–, que han tenido una actitud de subordinación al poder político y económico, fueron notablemente desplazados por los piqueteros.

Por otra parte, en función de la utilización de la metodología del corte de acceso a las empresas, ambas organizaciones obtuvieron distintas herramientas e insumos necesarios para llevar adelante los proyectos comunitarios, ya que el Estado se desentendía de su provisión. La UTD en particular, llegó a asumir ciertas funciones municipales, en la medida en que distintos sectores –directores de escuelas y hospitales, comunidades religiosas, clubes e individuos en general– comenzaron a acercar pedidos de obras, que se realizaban –y se realizan– sobre la base de los planes Trabajar.

El corte-pueblada de noviembre de 2000 y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte Salta

En noviembre de 2000 se produjo un nuevo corte motivado por el incumplimiento por parte de los poderes nacional y provincial de lo acordado tras los conflictos anteriores. A su vez, la protesta involucró las luchas de los trabajadores de la compañía de transportes Atahualpa y de la empresa de energía Edesa, en rechazo a los retrasos salariales y despidos que se habían producido, es decir, excedió una vez más lo sectorial, para erigirse como caja de resonancia de las reivindicaciones populares. Al igual que en otras oportunidades, llegó la represión, que fue enfrentada por los piqueteros. El asesinato de un manifestante a manos de la policía provincial¹⁴ hizo estallar otra pueblada, que arrasó con los símbolos de los poderes económico y político de Mosconi y Tartagal. Por la mañana del 10 de noviembre fueron destruidas las comisarías, los edificios públicos, la sucursal del Banco Nación en Tartagal y las sedes de las empresas Atahualpa y Edesa. Varias horas después, se produjeron saqueos a varios comercios tartagalenses; distintas fuentes, incluyendo a los sectores empresariales afectados, coinciden en desligar a los piqueteros de estos últimos hechos, vinculando al poder político provincial y local. De hecho, esta parece haber sido una de las tácticas adoptadas desde el poder para desprestigiar al movimiento piquetero. Lo cierto es que en ese contexto, la

¹⁴ Se trata de Aníbal Verón, trabajador de la empresa Atahualpa de Tartagal. Su nombre ha sido levantado como símbolo por distintos movimientos de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires.

policía se refugió en el Regimiento de Infantería de Monte de Tartagal, y debió intervenir la gendarmería para retomar el control de las calles.

En esa oportunidad, la lucha y la deliberación popular derivó en la convocatoria, por parte de la CTD y la UTD, de un Congreso de los Trabajadores Desocupados del Departamento General San Martín, para unificar las luchas y discutir un programa común. A su vez, los dirigentes del corte hicieron un llamamiento para unificar al movimiento piquetero en todo el país, a través de una Asamblea Nacional (*Prensa Obrera*, 23/11/2000, “Llamamiento de los piqueteros de Tartagal y Mosconi a un Congreso de trabajadores y desocupados”). El Congreso se reunió el 9 de diciembre, con la participación de la UTD de Mosconi, la CTD de Tartagal, el Frente Barrial de Desocupados de Embarcación y la Comisión de Desocupados de Pocitos.¹⁵ Las organizaciones presentes conformaron la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte Salta, y votaron un programa que recogía las principales reivindicaciones populares y de los trabajadores desocupados que se habían expresado desde 1997. Entre otros, se aprobaron por unanimidad los siguientes puntos:

- a) Control por la Coordinadora del acceso en los cargos a las empresas;
- b) piso salarial de 600 pesos mensuales de básico para 8 horas de trabajo o 3 pesos la hora, para todas las actividades;
- c) tercer turno en las empresas petroleras y reparto de las horas de trabajo sin bajar los salarios;
- d) imponer a la nación, la provincia y a todos los municipios que la obra pública se construya por administración y contratación directa de los compañeros por la municipalidad, eliminando el negocio de los contratistas;
- e) Fondo Especial de Hidrocarburos afectando la ganancia de las petroleras en 200 millones de pesos anuales, como compensación especial por los daños ambientales, económicos y de salud [...] Triplicación de las regalías bajo control de los trabajadores, en el camino de la renacionalización de YPF bajo control de los trabajadores, sin indemnización. [...];
- f) 10.000 planes de trabajo de 300 pesos como mínimo para el Departamento San Martín o inmediato subsidio a los desocupados por el mismo monto. Condonación de tasas e impuestos municipales y provinciales para todos los desocupados, tarifas subsidiadas de electricidad, gas y agua. Combustible subsidiado en todo el Departamento San Martín al igual que en el sur del país;

¹⁵ Embarcación y Pocitos pertenecen al departamento General San Martín, en esas localidades, al igual que en Mosconi y Tartagal, surgieron organizaciones de desocupados, aunque de envergadura menor.

g) aumento de los presupuestos de salud y educación públicas. Gratuidad de las prestaciones de alta complejidad. Becas para todos bajo control de la comunidad educativa. [...]” (Oviedo, 2001: 167).

Durante febrero de 2001, la Coordinadora desplegó una intensa actividad. Una de sus acciones más destacadas fue la instalación, durante 23 días, de piquetes sobre las compañías petroleras y contratistas de servicios para lograr la incorporación de personal e imponerles el “convenio piquetero” –2,50 pesos la hora– a aquellas que aún no lo habían aceptado. Cuando se produjo el despliegue de la gendarmería, la movilización se radicalizó: los piqueteros rociaron con nafta dos camiones-cisterna amenazando con hacerlos estallar en la destilería. En ese contexto, los trabajadores de una de las petroleras –Astra Evangelista– muchos de los cuales habían obtenido sus puestos en el curso de luchas anteriores, pararon las actividades, se sumaron a la protesta y contribuyeron a frenar la orden de represión que había sido impartida. Así, las empresas debieron negociar con los piqueteros y ceder a parte de sus exigencias. Por otro lado, en ese período se organizó una movilización que terminó destituyendo al responsable local del gremio de la construcción, que se había abstenido de participar en el proceso de lucha. De este modo, las organizaciones de desocupados se reafirmaron como un actor ineludible para las empresas a la hora de incorporar personal y negociar salarios.

El movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi estaba en alza, en un contexto en el que la crisis económica y política a nivel nacional y provincial se aceleraba. En marzo de 2001 renunciaron dos ministros de economía,¹⁶ y asumió Domingo Cavallo, que había ocupado ese cargo durante el mandato de Carlos Menem, y había sido señalado por el propio gobierno aliancista como uno de los principales responsables de la desocupación y el empobrecimiento de la población. En Salta, el gobernador Romero advertía con preocupación que “Los dirigentes políticos del departamento San Martín han sido borrados por los líderes piqueteros” (Ver Prensa Obrera, 11/4/2001 “Los dirigentes políticos...”). Sin embargo, en abril surgieron diferencias internas en la Coordinadora, aparentemente en torno a la distribución de los puestos de trabajo obtenidos, lo que produjo un quiebre de la unidad. Eso no impidió que en el mes de mayo la Coordinadora volviese a funcionar de hecho, cuando los obreros que estaban construyendo el hospital de Mosconi –que habían conseguido ese trabajo a partir de la lucha piquetera–, declararon una huelga exigiendo que entre en vigencia el convenio salarial de 2,50 pesos la hora.

El conflicto derivó en un nuevo corte de ruta, y en la movilización de los trabajadores desocupados de Mosconi, Tartagal, Pocitos, Embarcación y Aguaray, levantando los mismos

¹⁶ Machinea y López Murphy, que permaneció apenas una semana en el cargo.

puntos votados en el Congreso de diciembre. En ese marco, la justicia ordenó la captura de José Barraza y otros militantes del PO, que fueron detenidos y acusados de “sedición” y de ejercer la “democracia directa” en referencia a la resistencia a la represión y las Asambleas Populares realizadas en los cortes-puebladas de mayo y noviembre de 2000. El movimiento piquetero respondió convocando a un paro general en todo el Departamento, al tiempo que reforzaba el corte. Pero estaba en marcha un operativo represivo de gran escala. A los pocos días fue detenido Juan Nievas,¹⁷ y se libraron órdenes de captura contra el resto de los dirigentes piqueteros.

La pueblada de junio de 2001

Después de casi tres semanas de corte, el 17 de junio –día del padre– la gendarmería atacó sorpresivamente a los piqueteros, que se replegaron fuera de la ruta y comenzaron a resistir con piedras y gomeras. El gobierno difundió en los medios que había piqueteros armados y francotiradores, para justificar la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas.¹⁸ En esa línea, se difundió una versión que hacía aparecer a los piqueteros como “subversivos”, reeditando el mismo léxico utilizado durante la década de 1970. El juez Abel Cornejo, que ordenó el operativo, declaró que los francotiradores “eran personas bien adiestradas, pertrechadas con armas de guerra y gran cantidad de municiones”; el obispo de la zona, Jorge Lugones, declaró que los piqueteros eran “sediciosos que están fuera de la ley”, y que “han buscado el camino de la lucha armada para lograr sus propósitos”; el gobernador de Salta también habló de “lucha armada”; el secretario de Seguridad del gobierno Nacional denunció la intervención de activistas “perfectamente entrenados”; y fuentes de inteligencia llegaron a sugerir conexiones con las FARC colombianas (Ver *El Tribuno*, 18/6/2001 “Trágica emboscada de francotiradores a gendarmes en Mosconi”; *Clarín*, 19/6/2001, “Distintas especulaciones sobre el fantasma de grupos armados” y “Mosconi está aislado y no cesan los enfrentamientos”; *Clarín*, 24/6/2001, “Francotiradores”).

En el marco de esa atmósfera, la gendarmería ingresó a Mosconi. En esa oportunidad, muchos pobladores fueron presa del miedo, pero una importante cantidad de habitantes de ese municipio y de Tartagal se solidarizaron con los manifestantes,¹⁹ concentrándose en la plaza

¹⁷ En ese momento, Juan Nievas dirigía un agrupamiento de trabajadores desocupados de la CCC en Mosconi.

¹⁸ No tardó mucho en revelarse el hecho de que los francotiradores pertenecían a la Gendarmería, cuyos disparos provocaron la muerte de dos jóvenes que no participaban inicialmente de la manifestación: Carlos Santillán y Oscar Barrios. En total, la represión ha provocado cinco muertes y heridas de gravedad a decenas de pobladores de la zona hasta la actualidad.

¹⁹ Los gendarmes que sufrieron heridas debieron ser trasladados al departamento vecino de Orán, porque los enfermeros del hospital de Tartagal se negaron a atenderlos. (Ver *Clarín*, 19/6/2001, “Ecos de un día violento”).

principal, y obligando a la gendarmería a alejarse. A esa altura, con marchas y pronunciamientos en todo el país, el gobierno decidió dejar de lado la represión directa.²⁰ A partir de ese momento, y hasta el mes de diciembre, quedó constituida la llamada “Plaza del Aguante”, a la que se acercaron luchadores políticos y sociales de todo el país. Allí, instalados en carpas y cercados por las tropas de gendarmería, residieron Pepino Fernández y otros referentes de la UTD. Una vez más, el poder local había sido desplazado por el movimiento de trabajadores desocupados. No sólo las fuerzas de seguridad debieron abstenerse de ejecutar las órdenes de detención de sus dirigentes, sino que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Pablo Cafiero, viajó a Mosconi para reunirse con ellos. En ese contexto, el propio Cafiero admitió que “en Mosconi no hay Estado”. (*La Nación*, 24/6/2001). Sin embargo, la escalada represiva puso al movimiento a la defensiva, favoreció su aislamiento y le produjo un importante desgaste.

El reflujo

En julio y septiembre de 2001 se realizaron respectivamente la I y II Asambleas Nacionales Piqueteras y el movimiento se consolidó en la mayor parte del país, convirtiéndose en la principal fuerza de oposición al régimen. La UTD, centrada en Mosconi, no participó como organización en esos encuentros; la CTD intervino como parte del Polo Obrero. La emergencia del movimiento de trabajadores desocupados como actor destacado a nivel nacional y su accionar coordinado constituyó un factor trascendente en el desarrollo de la crisis política que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.²¹ Para la misma época en Tartagal-Mosconi, a pesar de que las organizaciones siguieron llevando adelante sus proyectos y sus luchas, se iniciaba un progresivo reflujo de la influencia piquetera, que se extiende hasta la actualidad.²² Así como esas localidades –y otras del interior– habían principiado el progresivo ascenso de masas a nivel nacional, se anticipaban ahora a su reflujo, permaneciendo prácticamente pasivas durante la caída de De la Rúa y la conformación de las Asambleas Populares en las principales ciudades del país.

Para explicar esa tendencia, contraria a la que se venía desarrollando desde 1997, resulta imprescindible tener en cuenta el accionar sostenido de los representantes del poder

²⁰ No obstante, según se denunció, los piqueteros que fueron detenidos durante los enfrentamientos sufrieron golpizas y torturas.

²¹ A partir de la segunda mitad del 2001, el movimiento piquetero demostró en varias oportunidades su capacidad de paralizar el país, movilizandodecenas de miles de trabajadores desocupados y cortando las principales vías de circulación.

²² Esta percepción es compartida por los militantes de las agrupaciones piqueteros, la prensa local y la población en general, según se desprende de las entrevistas realizadas.

económico y político, que a pesar de verse completamente superados en varias oportunidades, nunca dejaron de trabajar en función de contrarrestar el inédito desafío que se les presentaba. Los medios de comunicación provinciales –en particular el diario *El Tribuno*, propiedad de la familia del gobernador Romero– y luego los nacionales, intervinieron de manera sistemática para intentar minar la legitimidad del movimiento piquetero.²³ Al mismo tiempo, ante la imposibilidad de frenar los piquetes, los poderes políticos locales y provincial optaron en varias ocasiones por alentarlos, colocando a sus propios agitadores o “comprando” dirigentes populares,²⁴ favoreciendo de este modo el desplazamiento del movimiento en su conjunto como factor de articulación contra-hegemónica. En esa línea, resulta significativo recordar que tras la pueblada de noviembre de 2000 se produjeron saqueos a locales comerciales en Tartagal. Distintos testimonios sugieren que esas acciones fueron alentadas por el poder político, con el objeto de dividir a la población y demonizar al movimiento piquetero: “[...] intentaron hacernos creer que los que asolaron nuestra comunidad eran desocupados reclamando trabajo. Pero nada más lejos de la verdad. Los trabajadores, aunque estén desocupados, no forman hordas despiadadas sin respeto por la vida ni la propiedad ajena, no abusan de niños, mujeres y ancianos ni saquean a sus vecinos” (Ernesto Katz, empresario local y principal damnificado por los saqueos de noviembre de 2000, en *El Tribuno*, 3/3/2005, “Emotiva reinauguración del Banco de la Nación”). La vigorosa campaña anti-piquetera desatada en junio de 2001 no resultó inocua, y alimentó esa perspectiva.

A partir del año 2002, en el marco de un contexto económico caracterizado por la virtual paralización de gran parte de las actividades económicas, comenzaron a producirse numerosos cortes de ruta, algunos de los cuales eran impulsados por pocas personas con escasa o ninguna representatividad, alentadas, en ocasiones, por el poder político. A diferencia de las luchas desarrolladas por la UTD, la CTD-PO y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta, esos grupos no hacían reclamos generales, sino muy puntuales, vinculados exclusivamente a sus necesidades. Además, algunos de ellos comenzaron a exigir un “peaje” a los que querían circular por la ruta.²⁵ La falta de coordinación entre las organizaciones dificultó aún más la situación, atomizando la

²³ Este tema excede las posibilidades de este trabajo, y merece una investigación específica.

²⁴ Como ya se mencionó, el corte de mayo de 2000 fue alentado inicialmente por los intendentes de Tartagal – con un operador compartiendo la dirección del corte– y Mosconi. Por otra parte, varias entrevistas realizadas por el autor revelan que la “compra” de dirigentes se constituyó en una práctica regular antes y después de ese momento.

²⁵ En distintas entrevistas, dirigentes de las ambas agrupaciones han identificado este tipo de accionar como uno de los principales elementos de desgaste de la imagen piquetera del 2002 a esta parte.

representación piquetera.²⁶ Así, mientras los piqueteros aparecían como un todo, actuaban con orientaciones y criterios disímiles. En uno de los múltiples cortes que se produjeron en el 2002, y a partir del sistemático hostigamiento por parte de los servicios de seguridad, se decidió impedirle el paso a una ambulancia,²⁷ lo que derivó en la muerte de un paciente. Ante los ojos de una parte de la población, el responsable fue el método del corte de ruta y movimiento piquetero en general.

Finalmente, hacia noviembre del 2003 se produjo una dura represión contra un corte de ruta y accesos liderado por la UTD. Varios de sus dirigentes fueron apresados y golpeados por las fuerzas de seguridad, lo que motivó una importante reacción del movimiento piquetero y parte del resto de la población, que marcharon a exigir la libertad de los detenidos.²⁸ En el marco de esa protesta se produjo la quema de una de las sedes de la empresa hidrocarburífera Tecpetrol, ubicada sobre la ruta, cerca de la entrada a Mosconi. No se ha esclarecido quién impulsó esa acción,²⁹ pero lo cierto es que desató una importante campaña en los medios contra el movimiento piquetero, que era presentado como “vandálico”, y provocó el rechazo de una parte significativa de la población de Mosconi y Tartagal.³⁰

Los hechos mencionados, entre otros, favorecieron la disminución de la popularidad del corte de ruta como método y del propio movimiento piquetero. Sin embargo, sería un error pensar que la legitimidad del movimiento de trabajadores desocupados ante los ojos del conjunto de la población local ha sido afectada gravemente, como parece haber sucedido en otros lugares del país, al menos provisoriamente. En Tartagal y en Mosconi, no resulta sencillo divorciar al movimiento piquetero del resto de la sociedad, en función de los múltiples vínculos sociales existentes entre ambos. A su vez, la persistencia de la desocupación masiva y de la indigencia, junto al recuerdo de la etapa previa al avance neoliberal, inciden notablemente en el nivel de la conciencia de amplios sectores, que coinciden en señalar que la raíz de los cortes de ruta y del movimiento piquetero es la falta de trabajo y la miseria, demostrando un nivel de comprensión y tolerancia hacia el movimiento

²⁶ Debido a diferencias entre sus integrantes, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta no volvió a funcionar desde el año 2001. A partir de ese momento, surgieron en Tartagal nuevos agrupamientos, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) –liderado por “Tyson” Fernández y vinculado al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells–, que fue desplegando una actividad creciente. En Mosconi, en cambio, funcionó durante un tiempo el núcleo de la CCC liderado por Juan Nievas, pero actualmente la UTD es la única agrupación que sostiene una actividad sistemática.

²⁷ Estos vehículos fueron utilizados en otras oportunidades por los servicios de seguridad para filmar a los dirigentes de los cortes, e iniciarles procesos judiciales.

²⁸ Hacia noviembre del 2003, el movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi tenía 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados por la Justicia federal y provincial (UTD, 2003: 18).

²⁹ Referentes de la UTD sugieren que habrían actuado instigadores vinculados a la policía.

³⁰ Después de esos acontecimientos hubo incluso marchas contra el accionar de los piqueteros, protagonizadas fundamentalmente por maestras. (La información proviene de entrevistas realizadas por el autor a referentes de la UTD).

de piquetero ausente en otras regiones. Esta percepción aparece incluso a nivel del poder político local: “[...] el efecto digamos de cortar una ruta quien más la sufre, a quien más le impacta es al propio habitante de acá de la zona... o sea que desde ese punto de vista a nosotros nos genera muchas dificultades [...] pero eh... también no hay otro modo... aparentemente de... de protestar... manifestar por supuestas situaciones digamos... que la gente demanda... que no se le da respuesta el Estado nacional, el Estado provincial [...] actualmente la gente no encuentra otra forma de manifestarse [...] ¿no? Esto ha sido así [...] no tienen otra herramienta supuestamente para... para hacer escuchar sus reclamos... (Entrevista del autor a miembro del gabinete del municipio de Tartagal, junio de 2005).

Lo cierto es que actualmente, el movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi no es visualizado como un sector capaz de dirigir la lucha del conjunto social, como pareció insinuarse en su momento de auge. De producirse nuevamente, es de esperar que la coordinación entre sus principales organizaciones multiplique su capacidad de acción y le devuelva un papel de referencia, tanto a nivel local como a nivel nacional.

Bibliografía citada

...Benclowicz, José Daniel 2006. “La izquierda y la emergencia del movimiento piquetero en Argentina. Análisis de un caso testigo” en *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, Vol. XIII, Nº 37, Universidad de Guadalajara Septiembre-Diciembre de 2006

Benclowicz, José Daniel 2008. “Reflexiones en torno a la jerarquización social de los trabajadores en Tartagal y Mosconi: su papel en la constitución de las organizaciones de desocupados”, en *Historia, Voces y Memoria*, Nº2, Boletín del Programa de Historia Oral, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, julio de 2008.

Lapegna, Pablo 2000. “Actores heterogéneos y nuevas formas de protesta: los cortes de ruta de Tartagal-General Mosconi, Salta”, informe de beca Ubacyt, mimeo.

Oviedo, Luis 2001. *Una historia del movimiento piquetero* (Buenos Aires: Rumbos).

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003. *Entre la ruta y el barrio* (Buenos Aires: Biblos).

UTD 2003. “Informe de situación de General Mosconi, Departamento General San Martín”, mimeo.

Fuentes

Diario *Clarín*

Diario *El Tribuno*

Diario *Página 12*

Diario *La Nación*

Periódico *Prensa Obrera*

Municipalidad de Mosconi 2005 “Plan de desarrollo local y economía social”

Municipalidad de Tartagal 2004 “Plan de desarrollo local y economía social”

Ley 24.059 de Seguridad Interior

Entrevistas a militantes e informantes clave